

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DEL VALLE DEL CAUCA  
SALA DE ORALIDAD

Auto Interlocutorio

RADICADO: 76001-23-33-000-2020-00830-00  
MEDIO DE CONTROL: CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  
DEMANDANTE: SOCIEDAD REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.  
DEMANDADA: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES) - UNIÓN TEMPORAL AUDITORES EN SALUD

**MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES**

Santiago de Cali, catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020)

1. En auto del 7 de julio de 2020, la Sala declaró improcedente la acción de cumplimiento, porque, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la parte actora contaba con otros instrumentos de defensa judicial frente a los recobros por los servicios de salud. La anterior decisión fue notificada por estado el 10 de julio de 2020.

2. El apoderado judicial de la parte actora, el 15 de julio de 2020, presentó escrito al que denominó «*recurso de impugnación*» contra el auto del 7 de julio de 2020. Sin embargo, el Despacho, en los términos del artículo 16 de la Ley 393 de 1997, advierte que contra las providencias que se dicten en el trámite de la acción de cumplimiento, a excepción de la sentencia y del auto que deniegue la práctica de pruebas, carecen de recurso alguno, veamos:

**ARTÍCULO 16. RECURSOS.** Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente.

3. Al respecto, la Corte Constitucional (2013)<sup>1</sup>, en demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 16 (parcial) de la Ley 393 de 1997, consideró que la norma acusada es compatible con los derechos de contradicción, defensa y acceso a la administración de justicia, ya que responde a la necesidad de que la acción de cumplimiento sea un proceso sin dilaciones injustificadas. Adicionalmente, planteó

---

<sup>1</sup> Sentencia C-319 de 2013.

que la restricción de recursos contra las providencias, salvo las excepciones planteadas, no afecta de forma desproporcionada la vigencia material de las pretensiones ni la posibilidad general de exigibilidad judicial de los derechos y, en consecuencia, no excede el amplio margen de configuración legislativa que la CP reconoce en materia de procedimientos judiciales.

4. El Consejo de Estado (2016)<sup>2</sup>, al analizar la evolución jurisprudencial de dicha corporación en relación a la procedencia del recurso de apelación contra el auto que rechaza la acción de cumplimiento, indicó que, en principio y de una aplicación literal del artículo 16 de la Ley 393 de 1997, optaba por no dar trámite a la alzada. Posteriormente se modificó esa postura y se señaló que el artículo 16 de la norma en mención prescribe que el recurso de apelación no opera contra las providencias que se dicten en el trámite de la acción cumplimiento, pero, como el auto que rechaza la demanda no permitió iniciar el trámite referido, se consideró que el recurso de apelación sí procedía contra ese auto bajo los lineamientos de la norma general, esto es, el Decreto 01 de 1984, vigente en ese momento.

5. No obstante, manifestó que, con ocasión de la sentencia C-319 de 2013, la posición jurisprudencial del Consejo de Estado de nuevo varió para acatar plenamente la regla de derecho derivada de la *ratio decidendi* de la sentencia de constitucionalidad en cuestión, pues la concesión del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda debe guiarse por lo prescrito en el artículo 16 de la Ley 393 de 1997, que es norma específica y expresa para ese trámite, lo que implica la inexistencia de un vacío normativo que justifique la remisión a la norma general, el Decreto 01 de 1984 o, actualmente, el CPACA.

6. En virtud de lo anterior, se rechazará por improcedente el recurso formulado por la parte actora, pues, como se indicó, el auto del 7 de julio de 2020 que resolvió «*declarar improcedente la acción de cumplimiento*» carece de recurso alguno.

Por lo anterior, se

#### RESUELVE:

**PRIMERO: RECHAZAR** por improcedente el recurso presentado por la parte actora contra la providencia del 7 de julio de 2020, que resolvió «*declarar improcedente la acción de cumplimiento*».

**SEGUNDO:** Una vez ejecutoriada la presente providencia, archívese lo actuado.



**PATRICIA FEUILLET PALOMARES**  
**Magistrada**

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, radicación 25000-23-41-000-2015-02429-01(ACU).